

126-13

TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR: Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las diez horas con veintiún minutos del día cinco de junio de dos mil dieciocho.

El día 09/04/2018, se recibió escrito (folios 155), firmado por el licenciado
apoderado general judicial con cláusula especial de

y

mediante el cual agrega documentación y solicita se tenga por subsanada la prevención realizada por medio de resolución de las once horas con veintiún minutos del día doce de febrero de dos mil dieciocho; señala lugar para recibir notificaciones, así como las personas comisionadas para tal efecto.

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició sobre la base de la certificación remitida por el Centro de Solución de Controversias de esta Defensoría, —en adelante CSC—, como consecuencia de la denuncia interpuesta por la sociedad

, en contra de las proveedoras

y

., por la

supuesta infracción consignada en el artículo 42 letra e) de la Ley de Protección al Consumidor —en adelante LPC—, en relación al artículo 27 LPC, por no proporcionar información de forma clara, veraz, completa y oportuna de los servicios ofrecidos.

Habiendo concluido el trámite que señala la ley, sin que queden pendientes pruebas que practicar, de conformidad a lo estipulado en el artículo 147 de la LPC, se hacen las consideraciones siguientes:

I. La sociedad

, S.A. de C.V. expuso que desde

hacia quince años es titular de la tarjeta de crédito con terminación número ***-***-****-6410 y que solicitó a las proveedoras le proporcionaran información sobre dicha cuenta desde el año dos mil ocho hasta la actualidad, en razón de que no se encuentra de acuerdo con el saldo pendiente de pago; sin embargo, no ha recibido respuesta alguna.

Se siguió el procedimiento consignado en los artículos 143 y siguientes de la LPC, abriéndose a prueba y respetando la garantía de audiencia y el derecho de defensa de las proveedoras denunciadas, las cuales negaron los hechos atribuidos argumentando que los estados de cuenta enviados a la denunciante, refleja sus las transacciones efectuadas, así como los pagos recibidos, y muestran que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y

legales. La denunciante indica que ha pedido información y no se la dan, pero la única “solicitud” de información oportuna y veraz realizada fue mediante empleados de la denunciante, para pactar un acuerdo de pago, ofreciendo un pago de \$569.71.

II. Expuestos los alegatos de las partes, de conformidad al principio de legalidad consagrado en la Constitución de la República, este Tribunal se encuentra obligado a realizar las siguientes consideraciones.

Con relación a la infracción consignada en el artículo 42 letra e) LPC, la Sala de lo Constitucional mediante sentencia pronunciada a las trece horas con cincuenta y tres minutos del veinticuatro de agosto del año dos mil quince, en el proceso de inconstitucionalidad número 53-2013/54-2013/55-2013/60-2013 publicada en el Diario Oficial número 165, tomo 408, de fecha diez de septiembre de dos mil quince, falló: *Declárese inconstitucional, de un modo general y obligatorio, el artículo 42 letra e) de la Ley de Protección al Consumidor (...) porque al utilizar una fórmula de tipificación aparente y residual de las infracciones leves, en realidad no describe ninguna conducta de la que deban abstenerse sus destinatarios, sino que la materia de prohibición se determinaría hasta el momento de aplicación de la norma, con lo cual el legislador incumple el mandato de tipificación, certeza o taxatividad derivado del principio de legalidad y de esa manera contradice el artículo 15 Cn.*

Además, determinó que *el principio de tipicidad, taxatividad, determinación o certeza en el Derecho Administrativo Sancionador exige que la ley describa una conducta (acción u omisión), de sus elementos esenciales o de forma genérica, pero que sea constatable por el aplicador de la ley, lo que implica que la tipificación de una infracción administrativa al menos debe identificar o definir una conducta objetiva, verificable o constatable por el aplicador (...) sin que esta pueda ser construida por vía de la interpretación.*

En ese orden de ideas, la Sala en mención señaló que la fórmula *cualquier infracción a la presente ley* no describe un comportamiento objetivo o verificable que pueda adecuarse o subsumirse en ella, sino que solo establece una calificación jurídica o valorativa que puede ser atribuida a alguien dependiendo del criterio de aplicación del órgano competente.

Por tanto, al decir que la infracción leve es la infracción que no es grave o muy grave, no implica la tipificación de ninguna conducta, pues únicamente se trata de una definición formal o aparente que resulta demasiado indeterminada; en consecuencia, impide que los destinatarios de la disposición, a partir del texto del tipo sancionador, puedan predecir o

conocer de antemano qué conductas pueden ser consideradas como infracción leve o cuáles serán las consecuencias de su actuación.

III. La tipicidad de una conducta implica fundamentalmente que la misma se encuentre considerada como infracción de manera expresa en la ley y solo en dicho caso este Tribunal puede conocer sobre el fondo de la pretensión del denunciante, realizar la valoración de la prueba presentada y sancionar o absolver según corresponda, en aplicación del principio de legalidad.

Tomando en cuenta todo lo anterior, para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre la antijuridicidad de la conducta denunciada es necesario que la misma coincida con alguna de las infracciones establecidas en los artículos 42, 43 y 44 de la LPC, lo cual requiere realizar el análisis de tipicidad.

En el presente caso, dada la inconstitucionalidad del artículo 42 letra e) de la LPC (declarada con posterioridad al inicio de este procedimiento), bajo cuyo tipo sancionador se había calificado preliminarmente la conducta antijurídica atribuida a las denunciadas, no subsiste el elemento de la tipicidad originalmente considerado, pues dicha conducta ya no queda subsumida o adecuada a la descripción de algún tipo administrativo sancionatorio previsto en la LPC.

Por consiguiente, al no existir en la Ley una descripción de la conducta atribuida a las denunciadas que pueda considerarse infracción, no es posible analizar la antijuridicidad que en la denuncia se le atribuye a la conducta de las denunciadas como contraria a lo dispuesto en el artículo 27 de la LPC, y valorar si la misma está o no amparada en una causa de justificación, como el cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho o de una actividad lícita o el estado de necesidad.

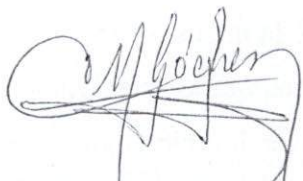
En consecuencia, procede concluir el procedimiento con un sobreseimiento a favor de las denunciadas respecto de la supuesta infracción al artículo 42 letra e) en relación con el artículo 27 de la LPC.

IV. Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14 y 101 inciso segundo de la Constitución de la República, 83 letra b) y 147 de la LPC, y, 7 del CPCM, este Tribunal **RESUELVE:**

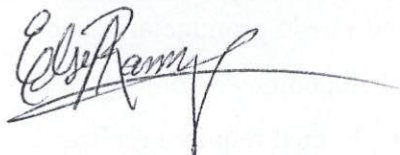
a) Sobreseer a las proveedoras , S.A. y
por la infracción atribuida al artículo
42 letra e) de la LPC.

b) Notificar esta resolución a los intervinientes.

Enmendado-cinco-Vale



PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LA SUSCRIBEN



M/I